

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/CTE/M/22

29 de octubre de 1999

(99-4786)

Comité de Comercio y Medio Ambiente

INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 12 DE OCTUBRE DE 1999

Nota de la Secretaría

1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) se reunió el 12 de octubre de 1999 bajo la presidencia del Embajador Sr. István Major, de Hungría. Se adoptó el orden del día que figura en el aerograma WTO/AIR/1172.

Concesión de la condición de observador a organizaciones intergubernamentales

2. Se acordó otorgar la condición de observador con carácter *ad hoc* al Banco Islámico de Desarrollo y el Centro de Desarrollo de la Pesca en Asia Sudoriental.

Punto 9 El programa de trabajo previsto en la Decisión sobre el Comercio de Servicios y el Medio Ambiente

3. El representante de las Comunidades Europeas recordó la propuesta de su delegación al Comité de Compromisos Específicos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) acerca de la clasificación del sector de servicios ambientales en septiembre de 1999 (S/CSC/W/25). Las ventajas de las tendencias actuales hacia la liberalización y privatización del sector del medio ambiente se pueden mejorar en las futuras negociaciones mediante una mejor clasificación. La cobertura de los servicios ambientales en la sección 6 del sistema de Clasificación Central de Productos de las Naciones Unidas (CPC) establecida en el documento MTN.GNS/W/120 era demasiado reducida y ya no reflejaba la realidad económica. Además de ese obstáculo, la clasificación tenía otras deficiencias técnicas: i) no reflejaba expresamente los principales servicios ambientales desglosados por medios (agua, desechos sólidos, aire y ruido); ii) dos sectores de la clasificación existente, "eliminación de residuos" y "servicios de saneamiento", eran prácticamente sinónimos (de gestión de los desechos); iii) la CPC existente no reflejaba los cambios de la industria ambiental, que actualmente, más que en la limpieza/corrección/control de la contaminación, empezaba a centrarse en la prevención y el control integrados de la contaminación, las tecnologías menos contaminantes y la gestión de los recursos y los riesgos, y iv) se centraba sobre todo en la infraestructura y los servicios públicos, por lo que pasaba por alto la prestación directa de servicios ambientales a la industria.

4. La CE propuso una nueva clasificación que, preservando la naturaleza mutuamente exclusiva de la clasificación CPC, abordaba la mayoría de los problemas arriba citados. Los servicios se clasificaban con arreglo a los medios (es decir, aire, agua, sólidos, comunes, ruido, otros). La clasificación propuesta comprendía servicios que sin duda pueden clasificarse como "exclusivamente" ambientales y excluía servicios conceptuales como el diseño, los servicios de ingeniería, la investigación y desarrollo y los servicios de consultoría, que seguían clasificados en otras partes del AGCS. La CE propuso que esos servicios fueran objeto de una negociación por grupos, cuyo resultado se incluiría en sectores pertinentes del AGCS distintos del medio ambiente. Con arreglo a ese criterio, el uso final se tendría en cuenta para la definición del grupo, pero no para modificar la clasificación existente, con objeto de ajustarla a la realidad en la esfera del medio ambiente, al tiempo que se procuraba llegar a un nivel más alto de liberalización. El enfoque basado en la negociación por grupos no debía constituir una oportunidad para modificar compromisos existentes a un nivel más

bajo. Los países que no estuvieran dispuestos a contraer un compromiso con respecto a toda una categoría (por ejemplo, los servicios de ingeniería) podrían sin embargo comprometerse en una esfera más reducida como la ingeniería ambiental.

Punto 10 Aportaciones a los órganos pertinentes sobre las disposiciones apropiadas que han de adoptarse en lo que respecta a las relaciones con las organizaciones no gubernamentales a las que se hace referencia en el artículo V del Acuerdo sobre la OMC

5. El representante de los Estados Unidos dijo que a ese tema se la había prestado considerable atención en los preparativos de la Conferencia Ministerial de Seattle. Desde que se inició la liberalización del comercio en el marco del GATT de 1947, se había registrado un aumento del interés del público por las negociaciones comerciales, en particular cuando la labor se hizo extensiva a asuntos que, como la población comprendía, afectaban a su vida diaria. Ello suscitó un mayor interés del sector público por las oportunidades de seguir las actividades de la OMC y de mantener un diálogo con los representantes del gobierno en la propia OMC. Los Estados Unidos estimaban también que era importante hallar la manera de mejorar las posibilidades de informar al sector privado y de dialogar con él. Los simposios de alto nivel de la OMC sobre el comercio y el medio ambiente y el comercio y el desarrollo celebrados en marzo de 1999 habían constituido acontecimientos importantes dado el alto nivel de participación de los gobiernos y de las ONG, lo que era prueba evidente del valor que esos intercambios podían tener para la OMC. Los Estados Unidos confiaban en que los Miembros pudieran cooperar entre sí para hallar el modo de mejorar esas posibilidades, a fin de que la OMC obtuviera un mayor apoyo del público a su importante labor.

6. El representante del Canadá dijo que el éxito del GATT/OMC había hecho comprender mejor al público las vinculaciones existentes entre la política comercial y los intereses nacionales y había suscitado inquietud respecto al nivel de transparencia en la OMC. Estimaba el Canadá que se debían realizar mayores esfuerzos para facilitar el entendimiento de esas vinculaciones, abordar esas inquietudes, corregir las falsas impresiones y crear la confianza en la OMC y sus actividades. Se podían tomar medidas de orden práctico a favor del objetivo común de obtener un mayor apoyo del público a la liberalización del comercio en general y a la OMC en particular. El Canadá había propuesto que la OMC adoptase una política de supresión del carácter reservado de los documentos, para informar a las poblaciones de manera más abierta y puntual y aportar los medios de un debate constructivo y documentado. Asimismo, el Canadá había propuesto un programa de iniciativas de divulgación de los Miembros y de la Secretaría para contribuir a esclarecer la labor de la OMC y mejorar la percepción del público sobre ésta. Al establecer una financiación con cargo al presupuesto ordinario para las iniciativas de divulgación, la Secretaría podría concentrar sus esfuerzos en su contenido y efectividad más que en la recolección de fondos. El Canadá había aportado financiación para todos los simposios de la OMC en materia de comercio y medio ambiente celebrados hasta la fecha. El Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) era también parte esencial del funcionamiento efectivo del sistema multilateral de comercio: el mejoramiento de la transparencia del ESD acrecentaría la confianza de todos los interesados en la solución de diferencias de la OMC. La transparencia formaba parte fundamental del proceso de examen de solución de diferencias. Con su planteamiento sobre la transparencia en la OMC, el Canadá no pretendía modificar su naturaleza intergubernamental, sino desmitificar las labores de la OMC para evitar la decepción del público. Era esencial mejorar la transparencia de las actividades de la OMC a fin de obtener y reforzar el apoyo necesario para mantener y mejorar el sistema multilateral de comercio.

7. El representante de las Comunidades Europeas dijo que era necesario mejorar el apoyo del público y acrecentar la transparencia de la OMC y que el CCMA tenía un importante papel que desempeñar en ese sentido. Las CE veían con agrado el resultado de los simposios de la OMC celebrados en marzo de 1999, a los que habían aportado financiación. Las CE apoyaban también las sesiones de información con la Secretarías de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente en el CCMA. Las CE se habían propuesto incrementar la transparencia en su proceso de toma de decisiones, con inclusión de los preparativos para la Conferencia Ministerial de Seattle. Las

reuniones con representantes de la sociedad civil sobre temas generales y sectoriales que se habían de tratar en la próxima ronda habían contribuido en gran parte a la posición de las CE. Siguiendo esa iniciativa, la OMC podría mejorar su prestigio ante el público. Como instrumento importante en los procesos de consulta con la sociedad civil, la Comisión había decidido sobre la metodología que se aplicaría para efectuar un análisis de sostenibilidad de la posición de la CE para la próxima ronda.

ACCESO A LOS MERCADOS

Punto 2 La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio

8. El representante de los Estados Unidos recordó que el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC hacía referencia al logro del objetivo de la liberalización del comercio juntamente con un compromiso general en pro del desarrollo sostenible. Los exámenes relativos al medio ambiente eran un medio importante para elaborar la información necesaria en ese sentido. El Gobierno estadounidense había contraído un compromiso de efectuar un examen en el contexto de una nueva ronda lo bastante pronto para que los resultados pudiesen tomarse en cuenta en su posición. La aportación pública sería una parte importante en ese proceso. Los Estados Unidos acogían favorablemente el hecho de que otros gobiernos hubieran contraído compromisos para realizar esos exámenes. Los Estados Unidos alentaban a todos los gobiernos a que estudiaran la posibilidad de realizar exámenes y los compartiesen con el CCMA como los Estados Unidos habían hecho con sus exámenes anteriores.

9. El representante de la India dijo que, como se ponía de manifiesto en la Declaración de Río, los exámenes sobre el medio ambiente incumbía realizarlos a los gobiernos nacionales como estimasen apropiado y que eran provechosos para que los gobiernos nacionales obtuviesen de los interesados aportaciones en las que basar sus posiciones nacionales. Sin embargo, eran puramente una prerrogativa nacional.

10. El representante del Canadá dijo que el punto de partida y el objetivo predominante de los debates sobre el comercio y el medio ambiente era el desarrollo sostenible. El examen de las políticas y los programas sobre el medio ambiente, denominado evaluación estratégica sobre el medio ambiente, era un instrumento importante de toma de decisiones para fomentar el desarrollo sostenible. La identificación y el debate de las consecuencias de la liberalización del comercio sobre el medio ambiente en relación con las negociaciones específicas de la OMC tenían muchas ventajas potenciales: i) contribuían a determinar prontamente los problemas potenciales y los efectos positivos de la liberalización del comercio; ii) contribuían a determinar la manera de mitigar los efectos ambientales e informar a los encargados de la toma de decisiones, y iii) permitían detectar y abordar muchas de las preocupaciones de los interesados. El Canadá efectuaría una evaluación estratégica sobre el medio ambiente de la próxima ronda de negociaciones de la OMC y alentaba a todos los Miembros de la OMC a realizar una labor similar. El Canadá estaba preparando un examen retrospectivo de la Ronda Uruguay, en consulta con las partes interesadas, reuniendo para ello información sobre sus efectos positivos, negativos o neutros. Ese examen proporcionaría al Canadá un sólido fundamento para la evaluación estratégica sobre el medio ambiente de la nueva ronda. El Canadá facilitaría al CCMA una copia de su evaluación retrospectiva nacional cuando se publicase. Sería provechoso para todos los Miembros que realizasen evaluaciones sobre el medio ambiente de la nueva Ronda intercambiar esa información en el CCMA.

Punto 4 Las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales en lo relativo a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

11. A propuesta de las Comunidades Europeas, el CCMA acordó levantar el carácter restringido de la Base de Datos sobre el Medio Ambiente de la OMC para 1998 (WT/CTE/W/118), que recogía las notificaciones relativas al medio ambiente en el marco de los Acuerdos de la OMC. La Secretaría actualizaría dicha Base de Datos para 1999, e invitaba a las delegaciones a que hiciesen sugerencias con respecto a las palabras de búsqueda utilizadas en su compilación.

Punto 6 El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio

Análisis sectorial

Agricultura

12. El representante del Canadá dijo que su delegación apoyaba los mensajes esenciales contenidos en el documento del Brasil (WT/CTE/W/109) sobre el efecto de las medidas ambientales y el acceso a los mercados en el sector agrícola. El documento del Brasil era valioso para la labor del CCMA porque proporcionaba una perspectiva de un país en desarrollo y señalaba la experiencia doblemente beneficiosa del Brasil en ese sector. El Brasil había reforzado el criterio de que un beneficio esencial de la liberalización del comercio era el mejoramiento de la gestión del medio ambiente facilitado por el desarrollo económico. Comentando el concepto de multifuncionalidad, cuestión tratada en el documento del Brasil, el Canadá indicó que algunos Miembros habían argüido que la aportación de beneficios indirectos o funciones múltiples de la agricultura estaba directamente vinculada a los fines de producción primarios de la agricultura y que el apoyo vinculado a la producción era un requisito necesario para el aporte suficiente de ventajas no alimentarias de la producción agropecuaria. Este argumento podía utilizarse para tratar de legitimar la oposición a una mayor liberalización, especialmente del apoyo nacional a los precios y la producción. Algunos habían hecho extensivo ese argumento a la ayuda manteniendo una alta protección en frontera, en particular los preocupados por la seguridad alimentaria. El Canadá convino en que la agricultura podía proporcionar muchas externalidades positivas, beneficios ambientales incluidos, y por lo tanto no cuestionaba el papel multifuncional de la agricultura. No obstante, también podría argüirse que éste sólo era uno de los numerosos factores que proporcionaban múltiples beneficios. En opinión del Canadá, el argumento de la multifuncionalidad no estaba bien fundamentado. La aportación de ayuda agrícola de amplia base, que fomentaba indirectamente las ventajas ambientales asociadas a la agricultura, era un método ineficaz e inefectivo de alcanzar los objetivos relativos al medio ambiente.

13. Estaba bien documentado en la labor del CCMA que el apoyo a la agricultura, y en particular el vinculado a la producción, podía llevar a la intensificación de la producción agrícola y el consiguiente riesgo para el medio ambiente. El apoyo a la agricultura podía también distorsionar las decisiones sobre producción de tal manera que provocase efectos nocivos para el medio ambiente; por ejemplo, la adopción de prácticas agrícolas de monocultivo. Los países dispuestos a defender su política agrícola a través del argumento de la multifuncionalidad tenían que comprender las repercusiones que la ayuda distorsionadora del comercio tenía sobre el medio ambiente. Al afectar al comercio de los países de escasa ayuda, incluidos los países en desarrollo que dependen fuertemente de la agricultura, obstaculizaban los esfuerzos mundiales por lograr el desarrollo sostenible. Los problemas no estarían localizados en esos países, pues los efectos negativos para el medio ambiente se hacían notar a menudo más allá de las fronteras nacionales. El Canadá compartía la opinión del Brasil de que los países debían abordar sus preocupaciones relativas a la multifuncionalidad de manera

acorde con los criterios del casillero verde, es decir el anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura, asegurándose con ello de que alcanzaran sus objetivos de modo que no se distorsionara la producción o el comercio ni se trasladara el problema a los productores de otros países. El deseo de algunos Miembros de promover el papel multifuncional de la agricultura no debía servir para obstaculizar el progreso hacia nuevos compromisos de reducción del apoyo nacional distorsionador de la producción y el comercio.

14. La representante del Brasil dio las gracias al Canadá por sus comentarios y dijo que su delegación estaba estudiando la posibilidad de redactar otro documento sobre esa cuestión más adelante.

15. El representante del Japón dijo que su delegación no podía apoyar un planteamiento demasiado simplista como el de que la liberalización del comercio era positiva para el medio ambiente. Las inquietudes sobre el medio ambiente debían debatirse al mismo tiempo que se liberalizaba el comercio. Con respecto a la intervención del Canadá, el Japón pidió a los Miembros que recordasen las deliberaciones sobre la desvinculación y las medidas de casillero verde adoptadas en el Comité de Agricultura y el proceso de análisis e intercambio de información, y añadió que el CCMA no era el lugar apropiado para las negociaciones sobre agricultura.

16. El representante de la Argentina recordó que el CCMA no estaba negociando el Acuerdo sobre la Agricultura, sino evaluando los efectos que las subvenciones a la producción y las relacionadas con la exportación tenían sobre el medio ambiente. En ese sentido, la Argentina ya se había expresado extensamente. El argumento central que se había expuesto en el CCMA no estaba vinculado a las subvenciones en general, sino a las subvenciones que afectaban a la producción, y en particular las subvenciones a la exportación. Las subvenciones permitían la explotación excesiva de los recursos naturales conexos, como la tierra y el agua, e impedían la internalización de los costos ambientales en los precios. El libre comercio contribuiría a una mejor asignación de los recursos y reduciría así las demandas de la producción sobre el medio ambiente si los precios reflejaban los costos reales de producción. No era ése el caso, principalmente porque ciertos países de la OCDE subvencionaban la producción y las exportaciones. No era posible internalizar los costos ambientales si los costos internos se externalizaban debido a las subvenciones.

17. La Argentina hizo referencia a la Conferencia de la FAO/Países Bajos sobre el Carácter Multifuncional de la Agricultura y la Tierra, celebrada en Maastricht del 12 al 17 de septiembre, y cuyos resultados se distribuirían (WT/CTE/W/127). En esa reunión, se reconoció que la agricultura, como toda actividad humana, tenía algunas consecuencias multifuncionales que eran beneficiosas para la sociedad. Sin embargo, lo importante eran las políticas que se aplicaban para preservar esos beneficios. Se había convenido en el CCMA que esas políticas deberían ser adecuadamente selectivas, transparentes y efectivas en función del costo, y no distorsionar la producción y el comercio. Como los países en desarrollo carecían de los medios necesarios para proteger a sus productores de las subvenciones concedidas en los países ricos, dichas subvenciones, que afectaban a la producción, y en particular las subvenciones a la exportación, contribuían a la pobreza rural, que era un elemento clave para el deterioro del medio ambiente en los países en desarrollo. Además, los productores de los países en desarrollo se encontraban ante la difícil disyuntiva de reducir los costos, con la consiguiente exclusión de las inversiones en tecnologías inocuas para el medio ambiente, o declararse en quiebra, lo que contribuía a la migración urbana y a la agitación social. Por lo tanto, las consecuencias de las subvenciones en los países de ayuda elevada, como los de la CE, sobre los países en desarrollo de ayuda escasa, eran la pobreza rural, el deterioro del medio ambiente y el creciente malestar social. Así pues, la supresión de las subvenciones ofrecía la posibilidad de un evidente beneficio triple: para el comercio, el medio ambiente y el desarrollo.

18. El representante de Costa Rica secundó los comentarios de la Argentina sobre las subvenciones a la producción y a la exportación: los costos ambientales debían internalizarse en los costos reales de producción.

19. El representante de las Comunidades Europeas dijo que era importante aplicar un enfoque equilibrado en las deliberaciones sobre los efectos de la liberalización del comercio agrícola sobre el medio ambiente, tomando en cuenta los efectos positivos y negativos. El impacto de la liberalización del comercio en el medio ambiente era incierto y las vinculaciones no eran automáticas. La multifuncionalidad de la agricultura debía tomarse en consideración, particularmente el hecho de que los servicios ambientales suministrados por la agricultura frecuentemente no los tenía en cuenta el mercado. La comunicación de la CE al Comité de Agricultura (AIE/40) subrayaba el carácter multifuncional de la agricultura, cuya importancia se había reconocido en el Comunicado de la OCDE de marzo de 1998. Las ventajas para el medio ambiente no eran sino una de las funciones que cumplía la agricultura. El hecho de que ésta aportase esos beneficios se había señalado también en el seminario que la OCDE había celebrado en septiembre de 1996 en Helsinki. Las conclusiones no eran aplicables a todos los tipos de agricultura, sino principalmente al sistema de producción extensiva, a menudo tradicional. Al establecer los conceptos básicos subyacentes al carácter multifuncional de la agricultura, la CE reconocía que la función principal de ésta era la preservación del paisaje rural, junto con la producción de alimentos y fibras, y la contribución a la viabilidad de las áreas rurales. Había una relación compleja y dinámica entre los recursos naturales utilizados en la agricultura y el medio ambiente. La biodiversidad en la CE no podía separarse de la agricultura: ambas se habían desarrollado a un tiempo. Existían problemas ambientales tanto en los países de escasa ayuda como en los de ayuda elevada, y la reducción de la cuantía de la ayuda no mejoraría automáticamente el medio ambiente.

20. El representante de Australia convino con el Japón en que el CCMA no era el foro adecuado para las negociaciones agrícolas, pero era importante reconocer que el CCMA haría mal en no ver la contribución que la liberalización agrícola podía aportar para la obtención de buenos resultados ecológicos. La Argentina había hecho referencia a la contribución que la eliminación de las subvenciones a la exportación podía aportar al mejoramiento de la calidad del medio ambiente. La política más acertada para abordar los objetivos ambientales era la política selectiva, efectiva en función del costo, transparente y desvinculada de la producción y el comercio. Esto se había resaltado en el Comunicado Ministerial de la OCDE en marzo de 1998. Era importante reconocerlo en el CCMA: no debía permitirse que en nombre de la multifuncionalidad se alentase en ningún país una política que fuese perjudicial para el medio ambiente o la sostenibilidad en otros. Ese reconocimiento sería un avance importante en el debate sobre el papel de la liberalización agrícola y los resultados positivos para el medio ambiente.

21. El representante de Chile apoyó la declaración de la Argentina de que debían eliminarse las subvenciones agrícolas tanto desde el punto de vista del medio ambiente como del comercio.

22. El representante de Polonia apoyó la declaración de la CE de que esa cuestión requería un análisis más profundo que tuviese en cuenta el papel multifuncional de la agricultura.

23. El representante de Corea dijo que al tratar del impacto de la liberalización del comercio de productos agrícolas sobre el medio ambiente se debían reflejar las diversas perspectivas de una manera equilibrada. El mantenimiento de la producción agrícola tenía funciones positivas tales como la conservación de la tierra, el control del agua, la acumulación de aguas subterráneas y la protección contra la erosión. Esos elementos se estaban cuantificando a través del grupo de trabajo mixto de la OCDE del Comité de Agricultura y el Comité de Políticas Ambientales. En la mayoría de los casos, el mercado no internalizaba suficientemente esos beneficios, y la concesión de una subvención al agricultor podría ser un posible remedio para las deficiencias del mercado. En ciertos países la ayuda a la agricultura había permitido a los agricultores mantener sistemas de exportación agrícola que sostenían una rica variedad de flora y fauna. Esos sistemas de producción no serían rentables sin ayuda, y las externalidades positivas ambientales de la agricultura quedarían mermadas si se redujeran las subvenciones agrícolas y, por lo tanto, la actividad agrícola. En ese contexto, la OCDE estaba elaborando niveles de referencia mediante los cuales podrían analizarse globalmente los efectos de la agricultura sobre el medio ambiente y utilizarse para determinar si se habría de sancionar o compensar

a los agricultores de acuerdo con los efectos generales, positivos o negativos. El CCMA debería examinar los análisis efectuados por otros foros, incluso los indicadores ambientales de la OCDE, que permitían calificar los efectos de la liberalización agrícola sobre el medio ambiente, a fin de poder analizar en un contexto más amplio la complejidad de la liberalización agrícola.

24. El representante de Nueva Zelandia compartía las opiniones de las delegaciones que habían aludido a las ventajas de la liberalización agrícola para el medio ambiente. Los resultados ecológicos positivos habían sido bien documentados y debatidos en el CCMA. Había problemas ambientales en todos los países, incluidos los países de ayuda escasa y de ayuda elevada. Sin embargo, como mejor podían abordarse era mediante políticas selectivas de ordenación de los recursos nacionales que no distorsionasen el comercio. Eso era aplicable a la protección de la biodiversidad y a otras cuestiones ambientales. Los cuantiosos recursos invertidos en medidas distorsionadoras del comercio en el sector agropecuario, tales como las subvenciones a la exportación, podían encauzarse mejor hacia otras prioridades públicas como la protección del medio ambiente. Así se expresaba claramente en los informes de la Cámara de los Comunes británica, Maurice Strong y el informe del Consejo de la Tierra de 1997 titulado "Subvención del desarrollo insostenible: menoscabo de la tierra con fondos públicos", que Nueva Zelandia facilitaría a la Secretaría para los Miembros interesados en consultarlo.

25. El representante de los Estados Unidos dijo que ese debate se había celebrado en el CCMA y otros foros ampliamente en los últimos años. Era un debate importante y los Estados Unidos compartían el punto de vista de tantas delegaciones que reconocían que la agricultura puede rendir beneficios más allá del efecto inmediato de producir alimentos y fibras. Sin embargo, esa cuestión era el tipo de política que los países escogen para promover las otras funciones de la agricultura. Las políticas más problemáticas eran las vinculadas a la producción, y en particular las subvenciones a la exportación, que no rendían beneficio alguno sino que, según pruebas evidentes, eran perjudiciales. Debía tenerse en cuenta que para alcanzar el desarrollo sostenible era necesario internalizar los costos ambientales. Las subvenciones obstaculizaban la internalización cuando estaban vinculadas a la producción y distorsionaban el comercio. Al mismo tiempo, era posible aplicar subvenciones que fomentasen la multifuncionalidad de la agricultura mediante el casillero verde, cuyo mantenimiento apoyaba su delegación. Los países que no daban subvenciones resultaban perjudicados en sus esfuerzos por alcanzar la sostenibilidad por la subvención practicada por otros. Por lo tanto, una de las principales contribuciones de la próxima ronda de negociaciones comerciales sería abordar las subvenciones nocivas para el medio ambiente que supondrían una ventaja para el comercio, para el medio ambiente y para el desarrollo.

26. El representante de Sudáfrica apoyó las declaraciones de las delegaciones que señalaban los beneficios positivos a largo plazo que se derivarían para el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la supresión de las subvenciones a las exportaciones agrícolas.

27. El representante de Tailandia se sumó a las delegaciones que propugnaban la eliminación de las subvenciones a las exportaciones agrícolas.

28. El representante de Suiza dijo que las subvenciones podían estar justificadas cuando tenían por objeto remediar fallos del mercado, por ejemplo premiando las externalidades positivas. Como las subvenciones pueden contribuir también a perjudicar al medio ambiente, sobre todo en otros países, se debían establecer mecanismos de apoyo selectivo. Se deberían incluir en los debates todas las formas de subvención a las exportaciones, incluidos el comercio de Estado y los créditos a la exportación.

29. El representante de Filipinas compartía la opinión de que toda forma de subvención en un país servía para darle una ventaja competitiva con respecto a los países que no concedían subvenciones.

30. El representante de Guatemala apoyó los comentarios de la Argentina sobre los beneficios que la eliminación de las subvenciones agrícolas suponían para el medio ambiente. El CCMA debía

seguir examinando el efecto nocivo de esas subvenciones, en particular las subvenciones a la exportación.

Pesca

31. El observador de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) presentó un documento de información (WT/CTE/W/126) en el que se expone la labor de la FAO sobre la capacidad pesquera y las subvenciones a la pesca. En el mismo año tendría lugar una consulta técnica en México para tratar de las cuestiones de medición relacionadas con la capacidad pesquera y el exceso de capacidad, sobre las cuales se prepararían directrices técnicas. En colaboración con Australia, la FAO estaba acopiando información relativa a la pesca ilegal, no reglamentada ni declarada. Esa información se examinaría en el contexto de dos consultas organizadas en 2000 y podría conducir al establecimiento de un plan internacional de acción sobre ese tema. Se examinarían los métodos de control de la capacidad pesquera y la transición a una ordenación responsable de la pesquería, lo que incluía la aplicación de programas de reducción de la flota y programas alternativos de subsistencia. Como se pedía en el Plan de Acción Internacional para la Ordenación de la Capacidad Pesquera, la FAO estaba iniciando la labor de determinación de los factores que contribuyen al exceso de capacidad, tales como la falta de control de los insumos y de la producción, los métodos de ordenación sostenibles y las subvenciones. Esta labor se llevaría a cabo mediante un examen de los documentos existentes, que podría llevar a la celebración de una consulta de expertos.

32. La FAO confiaba también en proporcionar un mayor apoyo directo a los Estados en desarrollo Miembros para el fomento de pesquerías sostenibles y para la aplicación del Plan de Acción Internacional. Con este fin, se estaba creando un programa de colaboración con el Banco Mundial. Las subvenciones y los incentivos económicos y financieros conexos constituían otro factor importante para la aplicación del Plan de Acción Internacional y para el logro de una ordenación sostenible de la pesca. En reconocimiento de la importancia de esta cuestión y del interés manifestado en diversos foros como el CCMA, la FAO supervisaría y examinaría los debates institucionales y técnicos y las contribuciones acerca de subvenciones a la pesca, acopiaría y difundiría información sobre las subvenciones a la pesca, e intercambiaría información con otras organizaciones interesadas. Empezaría un examen conceptual de las subvenciones a la pesca para aclarar conceptos y examinar las dificultades analíticas y los enfoques alternativos a la medición y evaluación del efecto de las subvenciones en el comercio y la sostenibilidad. Esta labor se examinaría en el contexto de una consulta internacional de expertos que organizaría la FAO a fines de 2000. El Departamento de Pesca de la FAO informaría sobre esa labor al Comité de Pesca de la FAO para las posibles actividades de seguimiento. En la realización de este programa la FAO recababa la estrecha colaboración con otras organizaciones intergubernamentales, en particular la OMC y sus Estados Miembros.

33. El representante de los Estados Unidos expresó su satisfacción por el documento de la Secretaría sobre "Normas del GATT/OMC sobre subvenciones y ayudas concedidas en la industria pesquera" (WT/CTE/W/80/Add.1), que presentaba una reseña de las posibles subvenciones relacionadas con la industria pesquera y contribuía a mostrar el tipo de problemas que las subvenciones a la pesca podrían causar a todos los países, y en particular a los países en desarrollo. Si continuase el ritmo de capturas que realizaban los países, acabaría por no haber peces. Era urgente abordar la cuestión del exceso de capacidad y la de las subvenciones a la pesca que la fomentaban. Los Estados Unidos apreciaban el examen de la FAO de sus actividades y el ejemplo que daba al abordar esa cuestión. Acogían con satisfacción la declaración contenida en el documento WT/CTE/W/126 sobre la necesidad de una estrecha cooperación con la OMC y sus Miembros. Confiaban en mostrar a la FAO el tipo de contribución que la OMC podía aportar mediante el proceso de Seattle. Era esencial mostrar al público, que observaba de cerca este debate, que la OMC había identificado una esfera en la que podía aportar su contribución tanto al comercio como al medio ambiente y el desarrollo.

34. El representante de Filipinas dijo que el documento WT/CTE/W/80/Add.1 era útil para establecer la situación actual de la asignación de recursos en la industria pesquera y analizar los efectos de las subvenciones a esa industria. Podía observarse en el documento que las subvenciones las concedían en gran parte los países desarrollados. Además, la mayoría de esas subvenciones se otorgaban al sector pesquero, que solía alentar los esfuerzos de pesca y propiciaba la extracción de una mayor cantidad de peces del océano. Eso creaba un desequilibrio contra los países, y sobre todo los países en desarrollo, que no estaban en condiciones de subvencionar su industria pesquera. Toda subvención podía ofrecer una ventaja competitiva a las industrias de los países que la practicaban. Filipinas estaba preocupado por la ordenación de la capacidad pesquera y las subvenciones a la pesca, que suscitaban una creciente inquietud en la industria.

35. La representante de Panamá dijo que el documento y la declaración de la FAO ayudaban a esclarecer los efectos de las subvenciones sobre el exceso de capacidad en el sector pesquero. Como éste formaba parte importante de la economía de Panamá, su delegación seguiría de cerca la labor de la FAO en ese terreno. El Canadá preguntó cuándo finalizaría el Plan de Acción de la FAO.

36. El observador de la FAO respondió que el Plan de Acción se ultimaría a fines de 2000. Había numerosos elementos que contribuían al exceso de capacidad pesquera y había que examinarlos de manera global durante los años 2000-2001.

37. El representante de Corea dijo que aunque el documento WT/CTE/W/80/Add.1 no era exhaustivo, ilustraba la diversidad y complejidad de las subvenciones a la pesca. Era difícil evaluar los efectos globales de la subvención a la pesca en el medio ambiente. Había algunas subvenciones que podían contribuir al exceso de capacidad, pero había otros tipos de subvenciones que eran neutras para el comercio y beneficiosas para el medio ambiente, como, por ejemplo, la ayuda estatal para el cese temporal y permanente de las actividades pesqueras, destinada a facilitar a los pescadores el retiro de esa actividad, para retirar del servicio las embarcaciones pesqueras superfluas o para fomentar la acuicultura. Una cuestión esencial en la determinación de la explotación y conservación de los recursos sostenibles era la ordenación pesquera, y no simplemente el comercio. Como las subvenciones a la pesca sólo eran uno de los factores que contribuían al exceso de capacidad, era necesario efectuar un análisis global para obtener una idea completa de los elementos que agotaban los recursos pesqueros. Otro elemento asociado a las subvenciones a la pesca era el aspecto social. Las comunidades de pescadores de muchos países en desarrollo estaban basadas en pequeñas unidades familiares cuya principal fuente de ingresos provenía de la pesca. Las subvenciones habían desempeñado un papel fundamental para conformar y revitalizar la industria pesquera y las comunidades pesqueras más que para fomentar el exceso de pesca.

38. Corea acogió favorablemente la adopción del Plan de Acción de la FAO, que constituía un medio constructivo para abordar esa cuestión. La FAO había determinado correctamente el exceso de capacidad pesquera como causa fundamental de la merma de los recursos pesqueros y había formulado un plan general destinado a lograr una ordenación eficaz, equitativa y transparente de la capacidad pesquera. El Plan de Acción preveía una aplicación gradual de múltiples fases basada en una evaluación de los objetivos y en la vigilancia de la capacidad pesquera de cada país. Asimismo, adoptaba un enfoque global en el que todos los factores debían tenerse en cuenta en la ordenación de la capacidad pesquera. La FAO contaba con un mandato claro, competencia y experiencia en el tratamiento de la cuestión de la conservación de los recursos marinos y tenía en cuenta al mismo tiempo todos los aspectos conexos, incluida la relación entre subvenciones, comercio y sostenibilidad de una manera integrada. Basándose en los resultados del análisis de la FAO y en el progreso sobre la aplicación del Plan de Acción por los Miembros de la FAO, la OMC podría definir una esfera en la que contribuir.

39. El representante de Australia dijo que el Plan de Acción de la FAO indicaba que las subvenciones contribuían de manera notable a causar los problemas que afectaban a la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales. Era evidente que otras subvenciones podrían no tener esos

efectos perjudiciales en el medio ambiente y Australia propugnaba también la realización de un examen de esas subvenciones en la OMC.

40. El representante del Canadá dijo que el documento WT/CTE/W/80/Add.1 ilustraba la amplia variedad de notificaciones en ese sector. Las notificaciones del Canadá se referían al sector pesquero en general y no eran programas utilizados para prestar asistencia financiera a la obtención de recursos marinos. Las pesquerías comerciales canadienses de la costa oriental y occidental habían resultado negativamente afectadas por el exceso de pesca exterior a la zona económica exclusiva del Canadá. Su país deseaba que se suprimiesen las prácticas que contribuían al agotamiento de los recursos marinos con los subsiguientes efectos en el medio marino y en el medio de subsistencia de los ciudadanos canadienses. Por esa razón, el Canadá apoyaba el Plan de Acción de la FAO y acogía favorablemente la declaración y el documento de la FAO y su disposición a cooperar con la OMC y sus Miembros. Varios países habían propuesto que se estableciera un grupo en la OMC para examinar las subvenciones que favorecían el exceso de capacidad pesquera. En un primer momento, ese grupo determinaría las subvenciones que acrecentaban la capacidad de los Miembros para capturar peces y otros recursos marinos más allá de su capacidad de reconstitución. La segunda fase consistiría en negociar los compromisos y disciplinas destinados a reducir y eliminar esas subvenciones. Al emprender esa labor, debían tenerse en cuenta también las subvenciones en otros sectores como el de la construcción naval, que tenían un efecto directo y considerable sobre el exceso de capacidad pesquera. Al mismo tiempo, había de reconocerse también que ciertas prácticas como la de recompra de licencias o asistencia a los trabajadores desplazados podían contribuir a reducir la capacidad pesquera, como había indicado Corea. Un examen de los problemas que afectaban al exceso de capacidad pesquera tendría que tener en cuenta además las obligaciones de los Miembros con sus poblaciones autóctonas, que podrían tener derechos constitucionalmente protegidos. A esa cuestión se le prestaba mucha atención en el Canadá en esos momentos. Estimaba el Canadá que todos esos elementos debían abordarse en el contexto de una negociación amplia para mejorar las disciplinas de subvenciones en el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. El Canadá había presentado una propuesta de negociación de ese tipo.

41. El representante de las Comunidades Europeas alentó a la FAO en su labor sobre el Plan de Acción. Con respecto al documento WT/CTE/W/80/Add.1, los Estados miembros de la CE notificaban con particular interés sus subvenciones, esforzándose por mejorar la transparencia de la OMC. Se animaba a los demás Miembros a hacer otro tanto. Estimaba la CE que la cuestión de las subvenciones era un elemento de un problema de mayor amplitud de ordenación de los recursos: era una simplificación excesiva considerar las subvenciones como el elemento principal que fomentaba el exceso de capacidad. Las subvenciones en la CE se establecían basándose en un programa multianual destinado a reestructurar la flota pesquera para reducir su capacidad y armonizar más estrechamente la capacidad de la flota y los recursos disponibles. Esas complicadas cuestiones debían remitirse de momento a la FAO.

42. El representante de Chile dijo que la supresión de las subvenciones a la pesca era beneficiosa para la biodiversidad, el comercio y la protección del medio ambiente. Chile destacaba que las subvenciones tenían efectos perjudiciales sobre los países en desarrollo que no podían subvencionar su industria pesquera. La posición de Chile era coherente con su práctica nacional de abstenerse de subvencionar al sector pesquero.

43. El representante del Japón recordó la declaración de su delegación en la reunión del Consejo General del 8 de septiembre, en la que el Japón había expuesto su posición sobre las subvenciones a la pesca. El Japón apreciaba las iniciativas de la FAO sobre esa cuestión. Estimaba que en el documento WT/CTE/W/80/Add.1 se exponían numerosos ejemplos de subvenciones "buenas". No se podrían considerar necesariamente "malas" ciertas subvenciones como las de la construcción de embarcaciones si existía una ordenación pesquera adecuada. Por ejemplo, como indicaba el número de agosto de *Fishing News International*, recientemente se había suprimido la reglamentación de Islandia sobre la construcción de embarcaciones, y los pescadores eran libres de construir barcos de

pesca. A consecuencia de ello, el Ministerio de Pesca islandés había recibido miles de solicitudes de licencias de pesca. El Japón suponía que los barcos de pesca se construían en Islandia sin subvenciones. La cuestión era si esa situación era más probable que ocasionase un exceso de explotación que otra en la que, por ejemplo, se construyesen barcos de pesca con subvenciones bajo un estricto control. Estimaba el Japón que la respuesta era afirmativa. Aunque en un documento del Banco Mundial se afirmaba que la proporción de subvenciones "buenas" era en el mejor de los casos de un 5 por ciento de la subvención estatal, solamente en lo relativo a las destinadas a reducir las embarcaciones, existía la impresión de que esa proporción era más elevada. Ciertas subvenciones contribuían a la sostenibilidad. Por ejemplo, algunas subvenciones eran necesarias para aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a fin de conservar y administrar los recursos marinos vivos; por ejemplo, la compensación por cese temporal de las actividades pesqueras para conseguir la reconstitución de existencias. Ésta debía considerarse una subvención "buena".

44. El Acuerdo SMC no contemplaba la cuestión de cómo lograr la utilización sostenible de los recursos pesqueros ni aclaraba la manera de evaluar los efectos de las subvenciones a la pesca sobre los recursos pesqueros mundiales. Por lo tanto, el debate sobre las subvenciones a la pesca que posiblemente ocasionaban el exceso de explotación sobrepasaba el mandato del Acuerdo SMC. Había que señalar que si las subvenciones a la pesca se trataban en la OMC, los Miembros podrían tener que estudiar la posibilidad de modificar el Acuerdo SMC vigente o establecer nuevas normas. A ese respecto, el Japón deseaba conocer las opiniones de los proponentes de la labor de la OMC en ese sentido. Si bien el Japón apoyaba una solución al problema del exceso de explotación, no estaba de acuerdo en que se optase por la eliminación de las subvenciones o la supresión de los aranceles de importación. Ese enfoque sesgado obstaculizaría la solución de otros problemas importantes y no llevaría a encontrar la solución fundamental del problema del exceso de explotación. Estimaba el Japón que era necesario enumerar todos los factores negativos y examinarlos desde una perspectiva técnica en la FAO. Teniendo en cuenta los resultados de ese examen, la OMC debería considerar la contribución que podría aportar a la utilización sostenible de los recursos pesqueros. En particular, la cuestión de las subvenciones a la pesca y las normas comerciales que pudieran contribuir a la utilización sostenible de los recursos pesqueros. El Japón había propuesto que se estableciese un grupo independiente en la OMC para llevar a cabo esas tareas. No apoyaba la propuesta de establecer un grupo independiente destinado sólo a debatir las subvenciones a la pesca.

45. El representante de Nueva Zelandia dijo que el documento WT/CTE/W/80/Add.1 era una actualización provechosa y una parte importante del mejoramiento de la transparencia con respecto a las subvenciones a la pesca proporcionadas por los Miembros de la OMC. Con respecto a las tendencias que cabía constatar por la información de ese documento, Nueva Zelandia tenía dos observaciones iniciales que formular. En primer lugar, la mayoría de las notificaciones efectuadas en el marco del Acuerdo SMC enumeradas en el documento hacían referencia al sector cosechero, así como a la modernización de la industria pesquera. En otras palabras, había al parecer numerosas subvenciones que podían contribuir directamente a aumentar la capacidad pesquera. En segundo lugar, casi todas las subvenciones notificadas que se enumeraban en el documento las proporcionaban países desarrollados. Una vez más, eso ponía de manifiesto que al debatir las subvenciones a la pesca se daba una situación potencial triplemente beneficiosa: para el desarrollo sostenible, para el comercio y para el medio ambiente.

46. Nueva Zelandia dio las gracias a la FAO por su documento y su presentación. El adelanto en el programa de trabajo de la FAO sería útil en el futuro debate de la OMC sobre la cuestión de las subvenciones a la pesca. En respuesta a algunas cuestiones planteadas por el Japón y otros países, Nueva Zelandia convenía en que las subvenciones a la pesca no eran el único aspecto del problema del exceso de capacidad. No obstante, las subvenciones eran claramente una esfera de actividad en la que la OMC tenía mandato y para la cual ya existían normas. La sugerencia de Nueva Zelandia era que se tomase esa experiencia como base para abordar la cuestión específica de las subvenciones a la pesca. Nueva Zelandia tenía interés en obtener información más concreta del Japón sobre otros tipos de asuntos que a su entender pudieran debatirse provechosamente en la OMC, esto es, cuál es la

"solución fundamental" del problema. Nueva Zelanda estaba interesada en saber si el Japón había podido identificar numerosas subvenciones "buenas" en el documento WT/CTE/W/80/Add.1 y le interesaría debatir este asunto con más detenimiento. La interpretación de Nueva Zelanda difería en que podían verse al menos seis páginas de subvenciones que podrían estar directamente vinculadas al exceso de capacidad porque se otorgaban al sector cosechero. El ejemplo presentado por el Japón de la construcción naval debía ser el más claro de todos para ilustrar una vinculación directa entre una subvención y la capacidad. Si se construyesen más embarcaciones, podrían capturarse más peces: era así de sencillo. Una cuestión que Nueva Zelanda esperaba debatir con el Japón era la de cómo podía clasificarse esa subvención como "buena". Debería aprovecharse la experiencia de la OMC en el tratamiento de ese asunto, y los Miembros debían dedicarse a abordar las subvenciones a la pesca en el marco del Acuerdo SMC como se proponía en el proceso preparatorio de la Conferencia Ministerial de Seattle.

47. El representante de los Estados Unidos dijo que nadie aducía que todas las subvenciones fuesen "malas". Las subvenciones a la pesca que eran motivo de preocupación eran las que contribuían al exceso de capacidad. No había discrepancia en que las subvenciones fueran las únicas causantes del exceso de pesca, pero era incontrovertible que la FAO consideraba las subvenciones a la pesca como un problema tal que había pedido su eliminación. Se había señalado que esos aspectos eran complicados y era difícil determinar qué subvenciones eran "buenas" y "malas". Si bien esto era cierto, sería difícil hallar una esfera de debate en la nueva ronda de negociaciones que no pudiera calificarse de complicada. Era obvio para los Estados Unidos que la FAO y la OMC tenían un papel complementario que desempeñar. La FAO tenía una importante experiencia en ese terreno y había ejercido un liderazgo favorablemente acogido. Al mismo tiempo, la OMC tenía experiencia sustancial en la normativa de las subvenciones. La razón por la que ese debate tenía lugar en la OMC era que esas subvenciones no sólo ocasionaban problemas para la conservación y el medio ambiente, sino que además distorsionaban el comercio. Había, pues, fuertes motivos para que la OMC interviniese y mostrase la manera de contribuir a resolver ese problema del sector de la pesca y del sistema de comercio.

48. El representante de la Argentina dijo que la lista de subvenciones notificadas con arreglo al Acuerdo SMC en el documento WT/CTE/W/80/Add.1 daba una indicación de los tipos de subvenciones aplicados por los países notificantes. Un número considerable de esas notificaciones contribuía al parecer al exceso de capacidad de las flotas pesqueras y eso explicaba por qué cada vez había menos peces en los océanos. Explicaba también por qué la pesca era todavía un buen negocio a pesar de la creciente escasez de peces. La Argentina reconocía que el libre acceso a los recursos pesqueros era un problema para establecer las políticas adecuadas de ordenación destinadas a la explotación sostenible de los recursos pesqueros. Además, había subvenciones que fomentaban las actividades pesqueras mediante la socialización de los costos de producción. Aunque la OMC no podía abordar la cuestión de la regulación del acceso a los recursos pesqueros, tenía experiencia en la normativa de las subvenciones. Por lo tanto, con referencia al comentario del Japón sobre la "solución fundamental" que debía tratar de encontrarse en ese terreno, la Argentina planteaba la cuestión de si podía convenirse en que la eliminación de las subvenciones que contribuía al exceso de capacidad pesquera formaba parte de esa solución fundamental. En caso de una respuesta afirmativa, podía encontrarse una base común para la futura labor. La Argentina preguntó también qué otros elementos deberían debatirse junto con la eliminación de las subvenciones a la pesca en lo relativo a su contribución al exceso de capacidad de las flotas pesqueras.

49. El representante del Japón reiteró que el mandato del Acuerdo SMC no abarcaba la cuestión del modo de asegurar la utilización sostenible de los recursos pesqueros ni aclaraba la manera de evaluar el impacto de las subvenciones a la pesca sobre los recursos pesqueros mundiales. Las subvenciones no serían un problema si existiera una adecuada ordenación pesquera. La solución fundamental del Japón consistía en que la OMC tratase de manera general los factores que contribuían a la utilización sostenible de los recursos pesqueros y no se concentrase únicamente en las subvenciones a la pesca. Una solución fundamental constaría de varios elementos que incluyesen la

eliminación de las subvenciones a la pesca que contribuyeran al exceso de capacidad o de explotación. No obstante, no se facilitaría una solución general concentrándose sólo en un elemento. Por eso, el Japón había propuesto que se abordasen todos los posibles factores negativos. Una de las cuestiones importantes era la de las actividades pesqueras ilegales, no declaradas ni reglamentadas, y en particular las actividades pesqueras con embarcaciones de pabellón de conveniencia. Las subvenciones a la pesca podían ser uno de los factores negativos que contribuyesen al exceso de capacidad, por lo que el Japón había propuesto un grupo de negociación diferente que se dedicara a debatir de manera general todos los elementos de la ordenación sostenible de los recursos pesqueros.

50. El Presidente recordó que había varias propuestas relacionadas con las subvenciones a la pesca que se estaban debatiendo en el Consejo General dentro del proceso preparatorio de la Conferencia Ministerial de Seattle.

Silvicultura

51. El representante del Japón recordó la propuesta de su delegación formulada en el Consejo General sobre los productos de la silvicultura y la pesca (WT/GC/W/221). Las negociaciones sobre esos productos deberían establecer una serie de normas y disciplinas que propiciasen la utilización sostenible de los recursos mediante el fomento de una conservación y una ordenación adecuadas de los recursos y fueran además justas y equitativas tanto para los países exportadores como para los importadores. Con respecto a los productos de la silvicultura y la pesca, que eran recursos naturales perecederos, el Japón había propuesto que se estableciera por separado un grupo dedicado a examinar todos los factores importantes de manera amplia, prestando la debida consideración a las cuestiones mundiales del medio ambiente y a las cuestiones de conservación y ordenación de los recursos con miras a su utilización sostenible.

Servicios ambientales

52. El representante del Canadá dijo que la ulterior liberalización del comercio de bienes y servicios relativos al medio ambiente proporcionaría beneficios para éste mediante la reducción de los costos, que permitiría a los gobiernos mejorar la calidad de la infraestructura básica del medio ambiente y contribuiría a fomentar el desarrollo sostenible. Desde la iniciación de la temprana iniciativa voluntaria de liberalización sectorial de la CEAP (Cooperación Económica Asia-Pacífico) en 1997, el Canadá se había esforzado por facilitar el comercio de bienes y servicios relativos al medio ambiente promoviendo una mayor liberalización en el sector. En ese contexto, el Canadá apoyaba la decisión de 1998 de los Ministros de la CEAP de abordar el elemento de eliminación arancelaria de la iniciativa en la OMC. Mientras tanto, proseguía la labor en la CEAP para liberalizar el comercio de servicios ambientales (que llevaban, en último término, a compromisos en la OMC), reducir los obstáculos no arancelarios que afectaban a ese sector y emprender proyectos de asistencia económica y técnica. En el Comité de Compromisos Específicos del AGCS, los Miembros de la OMC examinaban las cuestiones relacionadas con la clasificación de los sectores de servicios. Uno de los sectores examinados era el de los servicios ambientales, en el que muchos países, incluido el Canadá, habían presentado comunicaciones. El Canadá confiaba en que la mejora de la clasificación permitiera un mejor entendimiento del sector de los servicios ambientales que, a su vez, ayudaría a los Miembros de la OMC a contraer compromisos en ese sector en las venideras negociaciones del AGCS.

Comentarios generales

53. El representante de la India dijo que era cierto que la liberalización del comercio no debía conducir automáticamente a resultados positivos sobre el medio ambiente, por lo que la India subrayaba la necesidad de una correcta política ambiental. No obstante, era innegable que la liberalización del comercio, junto con las políticas ambientales apropiadas, podía dar resultados positivos. El acceso a los mercados era importante para que los países en desarrollo dispusieran de

mayores recursos para la protección del medio ambiente. La India era consciente de que las normas ambientales diferirían de uno a otro país y reconocía el derecho de cada uno de ellos a establecer su política apropiada. Los países en desarrollo estaban inquietos porque si las medidas comerciales se adoptaban sobre una base de normas superiores a las internacionales, esa situación podría prestarse al proteccionismo, lo cual afectaría negativamente a las oportunidades de los países en desarrollo de acceder a los mercados, así como a su posibilidad de establecer políticas ambientales.

54. El representante de los Estados Unidos dijo que eran importantes los comentarios de la India sobre la relevancia de las políticas comerciales complementadas con políticas ambientales a nivel nacional. Eso permitiría que la liberalización del comercio contribuyera también a favorecer al medio ambiente. Con respecto a la aplicación de normas nacionales que pudieran ser más elevadas que las internacionales, era importante tener presente que las normas de la OMC reconocían el derecho de los países a fijar sus propios niveles de protección aunque fuesen superiores a los establecidos por las normas internacionales. La tarea de elaborar normas internacionales armonizadas no consistía en fijar niveles máximos, sino mínimos, en ofrecer directrices suficientes para que los países que de otro modo tal vez no tuviesen la capacidad necesaria para ello pudieran elaborar un nivel de normas adecuado a sus necesidades. No sería apropiado considerar negativo que para apartarse de una norma internacional se hubiera de adoptar otra más elevada. Su país procuraba lograr la mejor norma sanitaria y ecológica para sus ciudadanos, y no era cometido de la OMC interponerse en ello. El cometido de la OMC era oponerse a las diversas formas de medidas proteccionistas.

55. El observador del Centro de Comercio Internacional (CCI) informó al CCMA sobre una reciente publicación del CCI titulada "Repercusiones de los Acuerdos de la OMC sobre el comercio internacional en las industrias relacionadas con el medio ambiente", de la que había ejemplares disponibles. Dicho informe abordaba las repercusiones de los Acuerdos de la OMC sobre el comercio internacional en la tecnología inocua para el medio ambiente y los productos conexos. El informe estaba basado en una amplia variedad de investigaciones de base industrial. Desde 1997, el CCI había realizado una serie de cursillos prácticos con departamentos gubernamentales, asociaciones de comercio y las industrias relativas al medio ambiente en varios países, que incluían la India, Malasia, el Paquistán, Filipinas y Tailandia. La información obtenida durante esos cursillos se había utilizado para redactar el informe. Asimismo, se había enviado un cuestionario a un centenar de empresas relacionadas con el medio ambiente y asociaciones de comercio para obtener información de la industria acerca de su comprensión de los Acuerdos de la OMC. El CCI dio las gracias a las Divisiones de Comercio y Medio Ambiente y de Comercio de Servicios de la OMC, y en particular a Jan-Eirik Sørensen, Sabrina Shaw y Aaditya Mattoo por su contribución al informe y su participación activa en los cursillos nacionales.

56. Las actividades del CCI sobre el comercio y el desarrollo se concentraron en los siguientes temas: i) incorporación de las consideraciones ambientales en el fomento del comercio y las estrategias de desarrollo de las exportaciones; ii) suministro de información comercial para que los exportadores puedan realizar los ajustes necesarios a los requisitos ambientales cada vez más rigurosos de los mercados internacionales (por ejemplo, sobre el etiquetado ecológico en el sector textil), y iii) determinación y realización de las oportunidades comerciales de los exportadores en el mercado internacional rápidamente creciente de los bienes y servicios relacionados con el medio ambiente, y la promoción genérica de productos "verdes". Las consultas del CCI con el mundo empresarial relacionado con el medio ambiente en los países en desarrollo y en las economías de transición habían permitido al sector privado tener una idea más clara del comercio internacional en las industrias vinculadas al medio ambiente y sus retos mundiales. Las opiniones más frecuentemente escuchadas señalaban que las instituciones internacionales, como la OMC y el CCI, podían prestar más apoyo técnico a los fabricantes y exportadores de tecnologías, productos y servicios inocuos para el medio ambiente, especialmente las PMA. El CCI esperaba proseguir la cooperación con la OMC a ese respecto.

VINCULACIONES ENTRE LOS PROGRAMAS MULTILATERALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE EL COMERCIO

Punto 7 La cuestión de la exportación de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen

57. El representante de Egipto hizo referencia a la carta de fecha 7 de septiembre de 1999 dirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la Secretaría de la OMC, que había sido distribuida a los Miembros del CCMA. En la carta se subrayaban los riesgos de la producción y consumo de ciertos productos, en concreto los jabones y cosméticos con contenido de mercurio que se fabricaban en países europeos para exportarlos, principalmente a los países en desarrollo, aunque su venta estaba prohibida en el país de origen. Egipto solicitó a la CE que aclarase esa cuestión.

58. El representante de las Comunidades Europeas dio una respuesta preliminar a la solicitud de Egipto, y esperaba responder más detalladamente en una próxima reunión. Por el momento, la venta de esos productos estaba regulada en la CE por la directiva sobre cosméticos N° 768 de 1976. Dicha directiva había sido enmendada 6 veces y adaptada en 23 ocasiones desde que entrara en vigor por primera vez. La directiva regulaba la venta pero no la manufactura de esos productos. Por ejemplo, algunos productos que podían clasificarse como medicamentos de venta libre en ciertos países estaban clasificados como cosméticos en la CE. Así pues, existía una situación similar si esos productos se producían en un país y no se vendían en él pero sí en la CE. Ésta había sometido voluntariamente los productos a base de mercurio y una gama de otros productos a un procedimiento de autorización provisional previa documentada para regular su exportación a terceros países antes de que entrase en vigor la Convención sobre autorización previa documentada.

59. El representante de la India dijo que Egipto había planteado una cuestión importante y solicitó a la CE que diese más detalles acerca de su cobertura por la Convención sobre autorización previa documentada en la próxima reunión del CCMA.

Punto 8 Las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

60. El representante de la India hizo observaciones preliminares sobre el documento de información de la Secretaría "La relación entre la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo sobre los ADPIC: con énfasis en el inciso b) del párrafo 3 del artículo 27" (WT/CTE/W/125). Estimaba la India que había una incompatibilidad fundamental entre la CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC. La CDB hacía referencia a los derechos comunales y soberanos sobre los recursos de los países. El Acuerdo sobre los ADPIC se refería a los derechos de patente y de monopolio de empresas individuales. El Consejo de los ADPIC estaba celebrando deliberaciones sobre esa cuestión y la India presentaría un documento en la reunión del Consejo de los ADPIC el 20 de octubre. Había algunas disposiciones del CDB que estaban en conflicto o podían estarlo con el Acuerdo sobre los ADPIC acerca de dos aspectos fundamentales. Cuando se concedían patentes se planteaba el problema del acceso a los recursos y el control soberano de los países sobre los recursos cuando no se había obtenido la autorización previa documentada. El concepto de compartición de beneficios, claramente inscrito en la CDB, estaba ausente en el Acuerdo sobre los ADPIC. En el párrafo 5) del artículo 16 de la CDB se afirmaba que podía haber problemas de compatibilidad entre los dos Acuerdos y que los Miembros debían tomar las medidas adecuadas para que no se produjesen conflictos.

61. La India estimaba que el documento WT/CTE/W/125 podía dar la impresión de que en lo referente a la protección de las obtenciones vegetales un determinado país tenía que seguir el sistema de patentes, como en el caso de los Estados Unidos y Corea, o bien seguir el sistema del UPOV. Podría ser incorrecto reconocer los casos de los Estados Unidos y Corea como sistema *sui generis*: aunque esos sistemas tal vez fueran algo distintos de los sistemas de patentes normales, básicamente

eran sistemas de patentes. Además, sólo los países en desarrollo habían aplicado sus obligaciones dimanantes de la Convención UPOV hasta entonces. Por lo tanto, hasta que no se examinaran los modelos alternativos *sui generis*, era incorrecto deducir que sólo hubiera dos opciones: o un sistema de patentes o un sistema *sui generis* basado en el UPOV. En el caso de Kenya se establecían cuatro opciones. Un país podía conceder la protección de las obtenciones vegetales mediante patentes; adoptando sistemas establecidos en la Convención UPOV; aplicando una protección adecuada de las obtenciones vegetales sin adherirse al UPOV, o creando un sistema *sui generis*. Las opciones existían y correspondía a cada uno de los países escoger el sistema que mejor conviniera a su desarrollo y a los objetivos públicos de su política, como se reconocía en el preámbulo y los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. Era éste un importante ámbito de estudio que, según la India, debía considerarse con mayor detenimiento.

62. El representante de Tailandia, en nombre de la ASEAN, recordó que en la reunión de junio del CCMA la ASEAN había solicitado que la Secretaría preparase un documento sobre la interrelación del CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC. Dicha interrelación era importante y los resultados de los estudios de países sobre la aplicación de los sistemas *sui generis*, así como los ejemplos de legislación promulgada para aplicar la CDB, tenían la finalidad de informar a los Miembros del CCMA. La ASEAN confiaba en que la experiencia obtenida con la elaboración de los sistemas *sui generis* fuese de utilidad para el futuro análisis del CCMA. La ASEAN comentaría más tarde el documento WT/CTE/W/125.

63. El representante de los Estados Unidos dijo que su delegación no había observado todavía ninguna incompatibilidad fundamental entre el CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC. En opinión de la India, el problema se reflejaba en el hecho de que la CDB hablaba de derechos soberanos y de los derechos de las comunidades autóctonas, mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC hablaba de derechos privados. Eso era correcto, pero no reflejaba necesariamente que hubiese conflicto alguno. Por ejemplo, el hecho de que una parte pudiera controlar, en el marco de la CDB, qué recursos se podían sacar de un país y utilizarlos para la investigación, no estaba en oposición alguna con el Acuerdo sobre los ADPIC, que preveía una protección a las empresas que hubieran hecho uso de innovación para suministrar un nuevo producto. Eso no les daba el derecho a sacar un producto de un determinado país. Los Estados Unidos seguían sin estar persuadidos de que hubiese conflicto entre ambos Acuerdos.

64. El representante de Suiza dijo que su delegación comentaría más adelante el documento WT/CTE/W/125. Podría ser de utilidad sumarse a los estudios de casos por países. Suiza convenía con la India en que podía haber contradicción entre la CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC. Por eso debería ser prioritario para la OMC aclarar los Acuerdos de la OMC y los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente. La posibilidad de que pudiera haber conflicto era razón suficiente para cooperar a fin de encontrar un mecanismo con el que abordar las posibles discrepancias antes de que se planteasen.

65. El representante del Canadá dijo que el Acuerdo sobre los ADPIC no era incompatible con la CDB. No obstante, cuestiones tales como los conocimientos tradicionales, los derechos de los agricultores y las vinculaciones entre la biodiversidad y la propiedad intelectual eran importantes y requerían que se les dedicara un estudio más detenido antes de poder incorporarlas a los acuerdos internacionales. Estimaba el Canadá que la OMPI era el principal foro de expertos para debatir los aspectos de la propiedad intelectual de esas cuestiones. Eso no era óbice para que dichas cuestiones se planteasen en debates de orden más general en otros foros, incluida la OMC. Las disposiciones del inciso b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se examinarían en el Consejo de los ADPIC. A Canadá no le parecía necesario modificar la redacción existente de esa disposición.

66. El representante de las Comunidades Europeas dijo que su delegación formularía más adelante sus comentarios sobre el documento WT/CTE/W/125. Sería provechoso que Costa Rica

detallase su legislación relativa a la biodiversidad, con referencia específica a las disposiciones de la ley destinadas a conciliar sus obligaciones con respecto a la CDB y a los ADPIC.

67. El representante de Costa Rica dijo que el Congreso de su país estaba evaluando la legislación para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, lo que incluía un examen de la ley sobre biodiversidad. A Costa Rica le agradaría hacer una presentación de su legislación cuando se hubiera ultimado ese examen.

68. El representante de Corea dijo que su país comentaría más adelante el documento WT/CTE/W/125.

69. El representante de la Argentina dijo que su delegación comentaría más adelante el documento WT/CTE/W/125. La Argentina había subrayado que sería apropiado concentrarse inicialmente en la posible interrelación de la CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, los artículos 15 y 16 de la CDB estipulaban la aplicación de medidas por las partes de la CDB relacionadas con la propiedad intelectual y por lo tanto esas medidas debían notificarse con arreglo al artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC. Para centrarse en la complementariedad entre esos dos Acuerdos, la Argentina solicitó a la Secretaría que facilitase los ejemplos de legislación nacional que se hubieran notificado con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC en cumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 15 y 16 de la CDB.

Informe del CCMA correspondiente a 1999

70. El CCMA adoptó el informe sobre la labor del Comité en 1999 (WT/CTE/4), que el Presidente presentaría al Consejo General en su reunión del 4 de noviembre, y adoptó el programa de trabajo y el calendario de reuniones del CCMA en el año 2000 (véase el anexo). El Presidente invitó a los Miembros a que comunicasen a la Secretaría las sugerencias de las secretarías de los AMUMA que pudieran participar en la sesión de información sobre los AMUMA en el año 2000.

ANEXO

Programa de trabajo y calendario de reuniones para el año 2000

1. El informe de 1999 del Comité de Comercio y Medio Ambiente (WT/CTE/4) estipula que el CCMA seguirá analizando todos los puntos del programa de trabajo con arreglo al "enfoque por grupos" acerca de los temas del acceso a los mercados y las vinculaciones entre el programa multilateral de medio ambiente y el de comercio. A reserva de conocer el futuro programa de trabajo de la OMC y apoyándose en la contribución de los Miembros, con inclusión, en lo posible, de su experiencia nacional, sobre los puntos del programa de trabajo, se propone el siguiente calendario provisional de reuniones. En cada reunión se dará tiempo a los Miembros para que vuelvan a ocuparse, si lo desean, de los puntos debatidos en la reunión anterior.

2. En la reunión que el CCMA celebrará los días 29 de febrero y 1º de marzo se abordarán los puntos correspondientes al tema del acceso a los mercados, a saber:

Punto 2: la relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales que tengan efectos ambientales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio;

Punto 3: la relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y:

- a) las cargas e impuestos aplicados con fines ambientales;
- b) las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos, y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado;

Punto 4: las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y prescripciones ambientales que tienen efectos comerciales significativos, y

Punto 6: el efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio.

3. En una reunión que celebrará los días 5 y 6 de julio, el CCMA debatirá los puntos relacionados con el tema de las vinculaciones entre el programa multilateral del medio ambiente y el del comercio, a saber:

Sesión de información con determinadas Secretarías de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente;

Punto 1: la relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas comerciales adoptadas con fines ambientales, con inclusión de las adoptadas en aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente;

- Punto 5: la relación entre los mecanismos de solución de diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente;
- Punto 7: la cuestión de la exportación de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, y
- Punto 8: las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
4. Los días 24 y 25 de octubre, las deliberaciones del CCMA versarán sobre los siguientes temas:

Examen de los dos grupos temáticos sobre el acceso a los mercados (puntos 2, 3, 4 y 6) y las vinculaciones entre el programa multilateral del medio ambiente y el programa de comercio (puntos 1, 5, 7 y 8);

- Punto 9: el programa de trabajo previsto en la Decisión sobre el comercio de servicios y el medio ambiente;
- Punto 10: aportaciones a los órganos pertinentes sobre las disposiciones apropiadas que han de adoptarse en lo que respecta a las relaciones con las organizaciones no gubernamentales a las que se hace referencia en el artículo V del Acuerdo sobre la OMC, y

adopción del informe de 2000 del CCMA.
